

Editorial

Concertación para qué

Concertación es una palabra que los resultados de las elecciones del 12 de marzo pusieron de moda entre el gobierno y los políticos de todos los colores. Ninguno de los dos partidos grandes tiene los votos suficientes para dirigir el curso de la Asamblea Legislativa, en los próximos tres años. La mayoría simple sólo es posible si los dos partidos se unen o si uno de ellos vota con el tercero con más diputados. En cambio, la mayoría calificada, sólo es posible si los dos partidos grandes votan de la misma forma. Sin embargo, el espíritu concertador no duró mucho tiempo. La alianza de los tres partidos de la derecha legislativa —ARENA, Conciliación Nacional y Demócrata Cristiano— excluyó pronto la posibilidad de una concertación política más amplia, que incluyera a la oposición.

La derecha legislativa resolvió así, de una manera pragmática e inmediata, el problema de la mayoría simple; pero tiene planteado aún el de la mayoría calificada que incluye, entre otras cosas, la aprobación de préstamos internacionales, la ratificación de tratados con otros países, las reformas constitucionales y las elecciones de segundo grado. Estos asuntos, que requieren de una mayoría calificada, sobrepasan el ámbito de la confrontación partidaria y afectan de forma directa al poder ejecutivo y al Estado. Aunque cuenta con muy poco espacio para desarrollarse, quisiéramos creer que la concertación es algo más que una primera reacción de los políticos a los resultados electorales. En cualquier caso, es una necesidad para resolver los graves problemas que afronta El Salvador. La coyuntura electoral hizo surgir en el horizonte esta posibilidad que, bien aprovechada, podría contribuir a la democratización de El Salvador.

1. Una posibilidad para la realidad nacional

En un primer momento, la clase política salvadoreña consideró la concertación como un instrumento útil para gobernar El Salvador. Luego, la derecha legislativa concertó entre ella misma para asegurarse la mayoría sim-

ple y el control del primer órgano del Estado. Tanto en uno como en otro caso, la concertación es concebida como un simple instrumento para evitar dificultades al gobierno y, o para satisfacer determinadas conveniencias partidarias. En ambos casos, el potencial transformador de la concertación es mínimo. En realidad, la concertación llevada a cabo por la derecha tiene como propósito único impedir que la oposición incida de manera determinante en el Estado. Aunque es innegable que los políticos de derecha e izquierda, pero más los primeros que los segundos, cuando hablan de concertación piensan más en un instrumento útil para repartirse y, o mantener cuotas de poder, para impedir que el adversario acceda al mismo y para controlar ciertas funciones estatales que estiman cruciales, hay que ir más allá para superar lo que no es más que cortoplacismo y oportunismo.

La concertación es indispensable para enfrenar con éxito los tiempos difíciles que aguardan a El Salvador. Contrario a quienes piensan que la transición de postguerra ha renovado de tal manera las estructuras de la realidad que lo peor ya ha pasado o que, prescindiendo de las limitaciones y resistencias presentes, el proceso avanza de todas maneras, El Salvador está entrando en un período muy difícil, tanto en lo económico y social como en lo ecológico y cultural —para no mencionar más que cuatro áreas claves.

En el campo económico, la división entre ricos y pobres no sólo tiende a mantenerse, sino a ampliarse. La pobreza no sólo es un obstáculo prácticamente insuperable para quienes ya son pobres, sino que cada año más familias pierden su capacidad para satisfacer sus necesidades básicas, empobreciéndose. Esta circunstancia es agravada por la desigualdad, en cuanto que cada vez menos tienen más y más tienen menos. Las nuevas tecnologías producen bienes y servicios con extremada rapidez y gran calidad, pero el uso de los mismos es inaccesible para la mayor parte de la población, que queda excluida. Así lo que debiera ser un beneficio universal se convierte en un mecanismo más de exclusión, cuando no perverso, porque, además de excluir, a veces asesina sin piedad. Este triple proceso de empobrecimiento, desigualdad y exclusión está llevando a la sociedad salvadoreña a niveles de deshumanización nunca antes vistos. Su extremada violencia es la manifestación más evidente de esta deshumanización.

Nadie puede desconocer ya que el eje de acumulación de El Salvador se encuentra atravesando una crisis severa: el crecimiento de la economía nacional es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población, el país es incapaz de alimentar a sus propios habitantes, los costos de los servicios sociales tienden a subir, mientras su cobertura se reduce y su calidad baja. El modelo de desarrollo salvadoreño de los últimos diez años se montó sobre las exportaciones, pero las primarias son prácticamente nulas y las nuevas todavía no han alcanzado el volumen esperado. El leve crecimiento económico registrado en los últimos años descansa más bien en el sector financiero y en los

servicios, que en la economía real. El dinamismo de dichos sectores depende más de estímulos externos —las remesas— que de los internos. El logro más destacado de los gobiernos de la década pasada en el campo económico, la estabilidad macroeconómica, da señales claras de agotamiento. La mundialización no es la responsable directa de estos problemas, pero tampoco proporciona una solución mecánica. De la misma manera, la crítica situación de la economía salvadoreña no es independiente de la mundialización y ésta, utilizada de manera inteligente y poniendo por encima de las ganancias de las multinacionales y del gran capital el bienestar de la mayoría de la población, podría ayudar a resolverlos de una manera satisfactoria.

En realidad, la concertación llevada a cabo por la derecha tiene como propósito único impedir que la oposición incida de manera determinante en el Estado.

La crisis económica se corresponde con una crisis social, pero no es causa directa de ella. La crisis social está configurada por el predominio de la violencia, la inseguridad física y jurídica de la población, la desintegración de las estructuras básicas de la sociedad, la pérdida de los referentes fundamentales de la conducta humana, la atomización de la organización social y la exclusión de la población del proceso de toma de decisiones que la afectan de forma inmediata y directa. El desempleo, la depreciación del salario real y la deficiencia de los servicios sociales influyen, sin duda, en la crisis de la sociedad, pero no son la razón principal de ésta. Es indudable que la elevada concentración de la riqueza nacional y el poder derivado de la misma son dos de los obstáculos más importantes para avanzar en la línea de la democratización, pero ello no da cuenta completa del estancamiento de este proceso. La crisis social se explica por razones intrínsecas, aunque no del todo independientes de los otros elementos de la realidad. Tiene mucho que ver con la pérdida de control de la sociedad y del Estado sobre sus miembros y sus actividades.

La crisis política, cuyo sobredimensionamiento suele ocultar la realidad social en la que surge, es sólo un elemento más de esa incapacidad social y estatal para ejercer un control eficaz sobre la actividad de la clase política. Un estudio publicado recientemente (Seligson, Cruz y Córdova, *Auditoría de la democracia. El Salvador 1999*) comprueba que existe una relación entre quien ha sido víctima de la delincuencia y el temor a la misma y el apoyo al sistema político. El apoyo es menor entre quienes han sido víctimas de la violencia así como también entre quienes se sienten atemorizados por ella. Esta relación se observa en la aceptación que un golpe de Estado de carácter

militar, motivado por la elevada incidencia de la delincuencia, tendría en algo más de la mitad de la población, aun muy por encima de razones de orden económico. Si bien las dos terceras partes de la población dicen preferir la democracia y sólo un reducido 12 por ciento preferiría un gobierno de corte autoritario, no se puede pasar por alto que a la cuarta parte de la población le da igual el tipo de régimen y no encuentra ventaja alguna entre un régimen democrático y uno autoritario. Es así como casi el 40 por ciento piensa que El Salvador sólo puede progresar eliminando con mano dura a quienes causan problemas.

No obstante los avances que este estudio señala en el campo democrático —medidos casi exclusivamente en términos de cultura política de la ciudadanía—, aquéllos se encuentran amenazados de manera seria por la inseguridad general en la que vive la población salvadoreña y porque la percepción de inseguridad provoca actitudes de desprecio hacia los derechos humanos y la legalidad y, en cambio, tiende a privilegiar el orden y la seguridad. Esa percepción de inseguridad hace que un sector significativo de la población pida una dirección menos comprometida con el diálogo, la concertación y la participación ciudadana y más dedicada a asegurar el orden por encima de cualquier otra cosa. De aquí a la aprobación de las operaciones de limpieza social y, o política, sólo hay un paso. De esta manera, la violencia y la inseguridad que genera están socavando el terreno de la democratización. El desfase entre la cultura política de la ciudadanía y la de la clase política es evidente.

El desarrollo de estas crisis ha deteriorado de tal forma los recursos naturales y el ser humano que ha creado una crisis ecológica. En efecto, los recursos

naturales, humanos y culturales de El Salvador han sido sometidos a un proceso de depredación sistemático y devastador. Las actividades de la población están organizadas de tal manera que destruyen y envenenan el suelo, el agua y el aire, haciendo la vida más precaria y, en algunos casos, negándola en la práctica. El modelo capitalista desarrollado durante el siglo pasado, agravado por la versión neoliberal actual, no se ha preocupado por las consecuencias depredadoras que su ambición desmedida y sin control tiene sobre la realidad ecológica salvadoreña. Esta es otra forma de hacer violencia, en este



caso, sobre los recursos naturales de El Salvador. Así, pues, la violencia no sólo tiene una dimensión social, sino también una dimensión ecológica.

Estas realidades se han impuesto con tal fuerza sobre la sociedad salvadoreña que han mermado su potencial creativo e imaginativo. Las nuevas tecnologías de la comunicación han contribuido más a asimilar la cultura nacional a los patrones culturales estadounidenses y occidentales que a estimular el cultivo de una identidad nacional y centroamericana. Sus componentes más originales han quedado reducidos al folclore. Comunicaciones mejores, más rápidas y relativamente más baratas no equivalen a más humanización. Los espacios tradicionales para la socialización se han visto reducidos. Es así como las creencias religiosas se trivializan de tal manera que se convierten en instrumentos de infantilización, la familia tradicional se desintegra y con ella desaparece uno de los ámbitos primarios para la comunicación y la construcción de la personalidad y la educación privilegia lo tecnológico, descuidando la formación humana y ética.

A El Salvador no sólo le aguardan tiempos difíciles, sino que ya está bregando en ellos. Estas dificultades son las que hacen la concertación relevante e indispensable, más allá de un entendimiento básico para que la actividad gubernamental no sea entorpecida por la oposición política o para que las expectativas particulares de los partidos políticos sean satisfechas. Ante esas dificultades, la importancia de la concertación para hacer viable un gobierno o satisfacer las ambiciones de poder de los partidos, palidece. Sin negar la necesidad de esta clase de concertación, la verdadera concertación debe centrarse en los desafíos que El Salvador tiene planteados en los campos económico, social, ecológico y cultural. El peso que los intereses políticos particulares puedan tener, aun cuando éstos sean legítimos, es siempre menor que el de los problemas planteados por la realidad nacional. No está de más recordar que si los intereses políticos son ilegítimos, deben ser rechazados sin vacilación.

La concertación que El Salvador demanda en estos momentos cruciales no parte de cero. La Comisión Nacional de Desarrollo ya ha identificado con un rigor notable algunos de los problemas más importantes e incluso ha avanzado algunas de sus posibles soluciones. Pero esta no es la única propuesta. Existen otras que no deben ser ignoradas, aunque debiera privilegiarse la de la Comisión, porque es resultado de una consulta amplia a la ciudadanía, mientras que las otras proceden de determinados sectores sociales y, en cuanto tales, carecen de la universalidad de aquélla. El Salvador cuenta, pues, con una valiosa experiencia de concertación y con un planteamiento válido sobre el contenido del cual ésta puede partir.

2. Peligros que deben evitarse

La concertación es una necesidad racional y un imperativo ético tan evidente que nadie que esté comprometido con el bienestar del pueblo salvado-



reño puede estar en contra de ella o puede mirarla con indiferencia. Sin embargo, esa evidencia no se traduce en acciones concertadas transformadoras, porque los actores principales de la vida nacional la circunscriben, en el mejor de los casos, al ámbito político. Es así como la concertación debe evitar peligros que se ciernen sobre ella.

Los políticos, por lo general, piensan en la concertación como en un instrumento para satisfacer su ambición de poder. Con demasiada facilidad tienden a identificar esa ambición con el interés general o, más bien, invocan éste para ocultar aquélla. Sin ir más lejos, el jefe de la fracción legislativa de la democracia cristiana no tuvo empacho alguno en reconocer ante la cámara de televisión que la integración de la junta directiva de la Asamblea Legislativa era como repartirse un pastel de poder, dinero y otros beneficios adicionales, cuyo disfrute es, por descontado, un derecho inalienable, según él. El Salvador iría mejor si el gobierno y los partidos políticos discutieran y negociaran más a menudo sus expectativas e intereses particulares, es decir, si poseyeran capacidad para concertar entre ellos sus diferencias; todavía le iría mejor si los términos de esas concertaciones fueran explicados a la sociedad y si permitieran que ésta opinara sobre lo concertado. Entendida así y dada la existencia de expectativas e intereses contradictorios, la concertación debiera ser una práctica normal para los gobiernos y los partidos políticos, en lugar de la demagogia, la descalificación mutua y el insulto al adversario.

La concertación no puede ser entendida como un mero instrumento para repartir y/o retener cuotas de poder. Esto lleva a un segundo peligro, el de entender la concertación como un asunto que sólo concierne a las cúpulas y elites. La concertación entre la cúpulas de poder —ya sean éstas partidos,

gremios, gobierno, etc.— ha sido y sigue siendo la gran tentación de la política salvadoreña. La exclusión deliberada de la participación popular ha circunscrito los temas de la agenda de concertación a los intereses de los que hasta ahora han sido sus actores. Así, la sociedad salvadoreña ha sido y sigue siendo relegada al papel de testigo remoto y a ser sujeto pasivo de unas decisiones con las cuales tiene que aprender a vivir —ya sea para su bien o para su mal. Algunos partidos políticos incluso han llegado al extremo de intentar acallar su voz, considerándose a sí mismos como única representación válida de la voluntad popular. Es por eso que la difusión de los resultados de las encuestas de opinión pública les incomoda tanto, hasta el punto de desconocerlas o descalificarlas con ligereza. El remedio contra la instrumentalización de la concertación es la participación real y efectiva de la población y sus organizaciones.

La poca pero importante experiencia de concertación que El Salvador posee se ha caracterizado por ser una concertación de elites. Estas se han arrogado una representación que, en el mejor de los casos, es cuestionable, pero que, por lo general, no poseen. Ni les es reconocida, en la mayoría de los casos, por quienes dicen representar. Las elites salvadoreñas, del tipo que sean, están acostumbradas a negociar entre ellas sus diferencias, dejando fuera a la sociedad, la cual queda convertida en sujeto pasivo, cuando no en víctima, de sus decisiones. Los acuerdos de paz y su cumplimiento, en los cuales descansa la transición de postguerra, fueron concertados y controlados por sujetos que actuaron en nombre del pueblo salvadoreño; sin embargo, éste y algunas de sus necesidades fundamentales fueron dejados de lado, postergadas para una circunstancia más propicia que aún no llega. Esta negociación fue tan elitista que sólo al final, y con muchas reticencias, las partes admitieron a los partidos políticos. Por lo general, la sociedad no es informada de los términos de la concertación, cuando ésta ocurre. El resultado le es entregado como una cosa hecha, indiscutible e inevitable, que tiene que aceptar como tal. Mientras la sociedad en su conjunto no sea parte activa de estas decisiones, la democratización de El Salvador seguirá estando en pañales.

Los políticos se arrogan la representación popular sin que nadie desafíe abiertamente esta pretensión suya por la debilidad de la organización social. Sin una organización y una participación sociales sanas y fuertes, la probabilidad de una concertación verdadera es casi nula. El sistema funciona de tal manera que sólo fomenta el entendimiento entre las cúpulas y las elites, al mismo tiempo que debilita las estructuras sociales existentes, ya de por sí bastante endebles. No obstante, la sociedad salvadoreña de postguerra cuenta en su haber con algunas experiencias positivas, en las cuales se ha puesto de manifiesto su potencial para influir en las decisiones políticas. Rescatar estas experiencias es importante a la hora de ampliar el ámbito y la agenda de la concertación.

La concertación no puede ser entendida como un mero instrumento para repartir y, o retener cuotas de poder.

Esto lleva a un segundo peligro, el de entender la concertación como un asunto que sólo concierne a las cúpulas y elites.

Una verdadera concertación debe comenzar desde abajo y debe ser llevada a cabo desde dentro, en contraposición a la práctica común, según la cual aquélla se ha llevado adelante desde arriba y desde fuera. La gran ausente en las concertaciones de la transición ha sido la sociedad, excluida de manera expresa. Esa exclusión tiene su explicación en el temor que sus exigencias despiertan en los políticos y en el poder a cuyo servicio éstos suelen estar. No es tanto que esas exigencias sean descabelladas, sino que implican transformaciones radicales en la estructura de poder: seguridad física y jurídica, satisfacción de las necesidades básicas, oportunidades para el desarrollo personal y comunitario, espacios para la organización y la participación social, justicia pronta y cumplida y gobiernos honestos y eficientes.

Finalmente, otra amenaza que se cierne sobre una concertación verdadera son las dos próximas elecciones de diputados y alcaldes de 2003 y las presidenciales de 2004. Aunque los partidos no lo reconocen así y, al contrario, alegan que ahora cuentan con un tiempo lo suficientemente largo como para concentrarse en aquellas tareas orientadas a beneficiar de manera directa e inmediata a la población salvadoreña, la realidad de las cosas es que, en su práctica política, no les resulta fácil prescindir de su interés primordial, la toma y, o el mantenimiento de las cuotas de poder. Este interés es tan fuerte que predomina sobre cualquier otro. Siendo esto así, lo más probable es que ni el gobierno, ni los partidos políticos tomen en serio la concertación. Por lo tanto, tratarán de ganar tiempo para no ceder en sus posiciones, mientras se esfuerzan por demostrar que es el otro el que se niega a concertar, con vistas a ganar votos para las próximas elecciones.

El FMLN hará lo que esté a su alcance para entorpecer los planes del gobierno de ARENA y así hacerlo aparecer como un fracaso, con lo cual, a su vez, espera provocar un descontento, que redundaría en votos a su favor. ARENA, por su lado, tampoco se quedará atrás y se esforzará por demostrar lo contrario. De hecho, ya le ha ganado una primera partida al FMLN al no permitirle ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa, que le correspondía, según la costumbre establecida. Para ello, apoyado en los otros dos partidos de derecha, introdujo una reforma inconsulta en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Atrapada, en medio de la lucha por el poder, protagonizada por estas dos fuerzas, se encuentra la sociedad.

3. El Salvador en estado de concertación

De este *impasse* sólo se puede salir si, parafraseando un editorial de Ignacio Ellacuría, de 1986 ("El Salvador en estado de diálogo", *Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989)*, pp. 1417ss.), El Salvador se coloca en estado de concertación. El estado de concertación consiste en que la mayor parte de la población posea una conciencia clara y firme sobre su necesidad, de tal manera que consiga ponerlo en marcha y, alcance, a través de él, aquello que necesita para resolver sus problemas más urgentes. De esta manera, la concertación deja de ser exclusivamente política, para adquirir una dimensión social y, al mismo tiempo, se desplaza de las elites a la sociedad, a la cual aquéllas apelan como si ésta respaldara sus acciones de forma incondicional.

La sociedad tiene que reflexionar sobre la gravedad de su situación y expresar su opinión con claridad, firmeza y valentía. El estado de concertación posee el potencial necesario para hacer esto posible y para contribuir a superar el predominio de la imposición de una minoría poderosa, a través de una simple mayoría cuantitativa. La democracia es, por supuesto, mayoría cuantitativa, pero es mucho más que eso. Y, ciertamente, no es la instrumentalización de la mayoría cuantitativa para ocultar la imposición del poder económico, social y político minoritario.

Una verdadera concertación debe comenzar desde abajo y debe ser llevada a cabo desde dentro, en contraposición a la práctica común, según la cual aquélla se ha llevado adelante desde arriba y desde fuera.

La gran ausente en las concertaciones de la transición ha sido la sociedad, excluida de manera expresa.

Colocar a El Salvador en estado de concertación requiere, pues —como diría Ignacio Ellacuría—, poner en marcha un gran sujeto colectivo. Cuanto más gente se comprometa con esta tarea, cuanto más pueblo se organice en favor de esta causa y cuantas más organizaciones de todo tipo se movilicen en esta dirección, tanto mejor para la concertación. El malestar de sectores sociales importantes con el manejo que los políticos hacen de los asuntos públicos se manifiesta cada vez con más claridad y fuerza. La fórmula que más se repite es "harta". Cada vez más gente dice estar "harta" de la mayoría de los políticos actuales y de su inmoralidad. Lo que hasta ahora es voz debe convertirse en clamor y éste en acción organizada. La solución a los problemas de El Salvador y la reivindicación de la práctica política no provendrán ni del gobierno actual ni de los políticos, porque ellos constituyen uno de los obstáculos más grandes que hay que superar y porque ya han demostrado su desinterés e incapacidad. Por lo tanto, hay que arrebatarles el monopolio de

la concertación y forzarlos a reconocer las aspiraciones más sentidas de la sociedad.

El estado de concertación consiste en que la mayor parte de la población posea una conciencia clara y firme sobre su necesidad, de tal manera que consiga ponerlo en marcha y, alcance, a través de él, aquello que necesita para resolver sus problemas más urgentes.

De todas maneras, la concertación tiene niveles diversos. El primero está constituido por la concertación al interior del gobierno y de los partidos políticos. Dado que ninguno de ellos es una fuerza granítica, la concertación externa debe ir precedida por y, o ser simultánea a una concertación interna entre los grupos de poder y las diferentes corrientes ideológicas que coexisten en su seno. El segundo nivel es la concertación acerca de las cuotas de poder y los medios para satisfacer los intereses particulares del gobierno y los políticos —aquí se ubica la concertación de la que éstos suelen hablar con alguna frecuencia. Finalmente, está la sociedad, que debiera ser la protagonista, a través de sus organizaciones, de una concertación más amplia, la cual comprende los problemas más urgentes planteados por la realidad nacional. Esta es la concertación verdadera, tanto por la naturaleza universal de su protagonista como de su agenda.

De poner en marcha la concertación en los dos primeros niveles se encargan los mismos políticos y el gobierno. Nadie debe empujarlos, porque sus propios intereses los mueven. Pero del tercer nivel debe ocuparse la sociedad misma. En teoría, el gobierno y los políticos reconocen su importancia; pero, en la práctica, no están interesados en una concertación dirigida por las organizaciones sociales, cuya meta sea buscar acuerdos básicos sobre los grandes problemas de la realidad nacional. Ya sea porque están convencidos o porque así les conviene o por una combinación de ambas cosas, el gobierno y los políticos alegan que ellos son los que poseen la representación necesaria para ocuparse de estos asuntos. De ahí que lo importante sea que la mayor parte de la población y de las organizaciones sociales de toda clase se coloquen en estado de concertación, esto es, que reflexione sobre cuáles son las soluciones mejores para poner fin a la situación calamitosa en la cual vive la mayoría de sus integrantes.

Esta reflexión ya ha comenzado a hacerse bajo la dirección de la Comisión Nacional de Desarrollo. El proceso está iniciado, pero ha sido detenido inexplicablemente. Aunque lo más probable es que el gobierno actual no esté interesado en darle continuidad, porque ello lo obligaría a mantener espacios reales de participación y a modificar su agenda de trabajo. La legitimidad

que el proceso haya adquirido, derivada de su amplia participación, no es obstáculo alguno para un gobierno autoritario y elitista.

Para colocar a El Salvador en estado de concertación sería necesario retomar el proceso y ampliar la reflexión, de tal manera que más población participe en ella, y sobre todo abrir espacios para encontrar coincidencias ahí donde hay propuestas divergentes. La población salvadoreña no es tan apática, ni tan indiferente como las apariencias podrían hacer creer. Los trabajos de la Comisión Nacional de Desarrollo encontraron una aceptación social muy destacada. El rechazo persistente de las organizaciones de derechos humanos y de la población en general del antiguo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos obligó a los diputados a iniciar el proceso de destitución y cuando ésta era inminente, aquél abandonó su cargo. Cada vez son más las organizaciones sociales que salen en defensa de su derecho al agua y a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación. El estudio antes citado sobre el estado de la democracia salvadoreña registra que son cada vez más los salvadoreños y las salvadoreñas que participan en el gobierno local.

La conmemoración de los veinte años del martirio de Mons. Romero amerita una reflexión aparte. El aniversario movilizó una masa de salvadoreños que ningún político ni organización ni institución ha sido capaz de movilizar en las dos últimas décadas. Probablemente, desde el 30 de marzo de 1980, el día de su funeral, nunca antes tanta gente ha salido a las calles y plazas de la capital para pronunciarse por la verdad, la justicia y la libertad. Más aún, la población se manifestó unida —y no fragmentada— alrededor de la figura de Mons. Romero para proclamar su identificación con ese



símbolo de la liberación del pueblo salvadoreño y para protestar contra la impunidad de sus asesinos. Y lo más sorprendente de todo fue la participación de la juventud —uno de los sectores sociales que pasa por ser uno de los más indiferentes ante el acontecer de la realidad. No obstante ser un hecho coyuntural, es una manifestación patente del potencial de la sociedad salvadoreña para ponerse en movimiento como un todo unido. De estas experiencias puede concluirse, al menos de una manera provisional, que el pueblo salvadoreño participa cuando encuentra los espacios adecuados.

La concertación necesita de esos espacios, en donde se puedan armonizar propuestas divergentes para enfrentar los desafíos principales de El Salvador en lo económico —modelo de desarrollo sostenible, disminución drástica de la pobreza, reforma tributaria, alcances y límites del mercado, condiciones de la apertura comercial, integración regional, etc.—, en lo social —política de seguridad pública, la cual incluye la policía, el ministerio público y el sistema judicial, las políticas de educación, salud, empleo y vivienda, la participación ciudadana en la toma de decisiones, la construcción de la institucionalidad estatal, etc.—, en lo ecológico —la protección de los recursos no renovables, la recuperación y preservación de los subsistemas ecológicos, etc.— y en lo cultural —el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, las nuevas realidades familiares, juveniles y religiosas, las formas alternativas de expresión social e individual, etc.

Es muy discutible si en El Salvador actual se da la concertación política, ya no se diga nada de la social. A lo más, la derecha negocia sus intereses y no de forma permanente, sino coyuntural. La concertación entre la derecha y la izquierda, entre el oficialismo y la oposición es, en la práctica, no sólo inexistente, sino descartada de antemano como algo imposible. De todas maneras, aunque un entendimiento entre estos dos últimos sectores fuera posible, no sería suficiente, porque la concertación se mantendría aún en el ámbito político, siendo necesario que pase al social, tanto por lo que corresponde a su meta última, el cambio de la estructura de poder, como a sus protagonistas, la población misma. En este sentido, la verdadera concertación no ha comenzado y no comenzará mientras las organizaciones e instituciones sociales, como las universidades, las iglesias, las asociaciones, los gremios, los medios de comunicación social, etc., no se apropien de ella. Está demostrado que ni el gobierno ni los políticos lo harán en su nombre o para su beneficio. Por lo tanto, éstas tienen en sus manos una responsabilidad enorme ante la sociedad salvadoreña y su futuro.

El estado de concertación, que aquí se propone, requiere —como el estado de diálogo, en 1986— una nueva disposición de los ánimos y una nueva forma de comportamiento público. La crispación y la polarización deben ser reemplazadas por la apertura y la tolerancia. El distanciamiento y la confrontación deben ser sustituidas por la búsqueda del acercamiento y la coincidencia. Estas actitudes nuevas no presuponen que las causas del alejamiento y la

confrontación ya hayan desaparecido, ni que las dificultades para concertar intereses contrapuestos ya se hayan desvanecido, sino el convencimiento de que las actitudes predominantes hasta ahora no son las mejores para defender los propios intereses, ni mucho menos el interés general. Aparte que la sociedad está reclamando un cambio radical de actitud en la vida pública. Algo se ha avanzado al respecto, pero no por el lado de los políticos, sino por el de aquellos sectores sociales que cada vez rechazan con mayor énfasis la intolerancia y la confrontación. Una de las manifestaciones recientes de este repudio social es la ausencia de votantes en las elecciones recién pasadas. Ahora bien, del rechazo hay que pasar a exigir y cultivar la concertación.

Es necesario y urgente, como un primer paso, forzar al gobierno y a los partidos políticos a disminuir el nivel de confrontación e intolerancia. Cuanto mayor sea la presión que la sociedad, organizada y no organizada, ejerza sobre ellos, tanto mayor será la posibilidad para que la concertación vaya ganando terreno.

Esto último sólo es posible creando hábitos de tolerancia y paciencia, entendidos como hábitos individuales y colectivos. Tolerar no significa transigir con el error, la mentira o el mal, sino comprender a quienes ven las cosas de otra manera, ya sea por sus intereses creados, por hábitos adquiridos o por ideas preconcebidas. La tarea es muy dura y de largo plazo, porque para avanzar en estos ámbitos hay que revertir hábitos adquiridos hace muchísimas décadas, tantas, que lo normal es la intolerancia. La tolerancia es algo completamente extraordinario en el medio social y político salvadoreño. De ahí que la espera sea un elemento indispensable. La paciencia sabe que se requiere de mucho esfuerzo durante mucho tiempo para poner fin a la intolerancia.

El estado de concertación —diría hoy Ellacuría— exige una gran creatividad y una gran capacidad para anticipar el futuro posible y sus amenazas y para proyectarlo en términos realizables. La cuestión no debiera ser quién ocupa el poder del Estado, sino cómo crear una situación nueva, en la cual las necesidades básicas de la mayoría sean satisfechas con el esfuerzo de todos y en la cual se pueda establecer un orden político y social nuevo, que permita a todos los salvadoreños y las salvadoreñas vivir más humanamente, siendo más libres y solidarios, a partir del desarrollo permanente de sus mejores potencialidades. La creatividad es necesaria para superar las desconfianzas mutuas y los puntos encontrados, dejando de lado los esquemas trasnochados, que sólo han servido para llevar a El Salvador a la situación calamitosa

en la que se encuentra en la actualidad. Si algo falta ahora es creatividad. Unos se conforman con lo que han venido haciendo o diciendo ininterrumpidamente durante dos décadas. Otros han encontrado una posición cómoda en algunas de las posibilidades abiertas por la transición de postguerra, se han atrincherado en ellas y las exhiben para demostrar las bondades de lo que llaman "los nuevos tiempos". Finalmente, algunos otros se refugian en la indiferencia o en el escepticismo para no ponerse en actitud de búsqueda.

Es necesario y urgente, como un primer paso, forzar al gobierno y a los partidos políticos a disminuir el nivel de confrontación e intolerancia. Cuanto mayor sea la presión que la sociedad, organizada y no organizada, ejerza sobre ellos, tanto mayor será la posibilidad para que la concertación vaya ganando terreno. Si el estado de concertación se convierte en un clamor nacional, mantenido por la mayoría de la población, es probable que las fuerzas que se resisten se vean obligadas a cambiar para no perder la poca popularidad que aún les queda. No hay que olvidar que ni el gobierno ni los partidos políticos operan en el vacío social, aunque a veces esa es la impresión que tiene el ciudadano común y corriente. Por lo tanto, si sectores sociales importantes impulsan la concertación y llegan a crear un ambiente nacional nuevo, forzarán a los actores principales de la confrontación y la intolerancia a moverse en la dirección contraria. Resistencias habrá muchas y muy poderosas, las amenazas que se ciernen sobre ella serán constantes, pero cuanto más se favorezca este estado de concertación, más oportunidades tendrá.

El futuro de la concertación de la cual hablaron el gobierno y los políticos después de las elecciones de marco recién pasado es muy incierto. La imposición del presidente de la Asamblea Legislativa por parte de la derecha revela el tipo de concertación a la cual este sector está dispuesto. Este hecho no augura nada bueno para nadie, sino más confrontación e intolerancia en la Asamblea Legislativa y entre el gobierno y los partidos políticos.

San Salvador, 11 de mayo de 2000.